

**XXV CONGRESO NACIONAL Y  
V INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES  
“Integridad y equidad electoral en América Latina”**

**Tema 1: Integridad y equidad electoral en América Latina  
Coordinador: Luis Diego Brenes Villalobos**

**Ponencia:  
REGLAS DE EQUIDAD EN LA LEGISLACIÓN ELECTORAL  
MEXICANA PARA LA CONTIENDA ELECTORAL**

**Que presenta:  
CARLOS SERGIO QUIÑONES TINOCO**

**Sede: San José, Costa Rica  
Del 11 al 14 de Noviembre de 2014**

# **REGLAS DE EQUIDAD EN LA LEGISLACIÓN ELECTORAL MEXICANA PARA LA CONTIENDA ELECTORAL**

**CARLOS SERGIO QUIÑONES TINOCO**  
Universidad Juárez del Estado de Durango  
Instituto de Investigaciones Jurídicas  
[carlosergiog@yahoo.com.mx](mailto:carlosergiog@yahoo.com.mx)

## **RESUMEN**

El tema de la equidad en la contienda electoral presenta dos vertientes que deben ser examinadas por separado; la primera vertiente se refiere a las condiciones establecidas en la ley que tienen que ver con los derechos y prerrogativas de los partidos políticos definidos y enumerados en el articulado de la ley de la materia; la segunda, se refiere a las condiciones que debe garantizar el Estado para generar un ambiente de igualdad de oportunidades y posibilidades para el desarrollo de las campañas políticas de cada uno de los partidos políticos y candidatos contendientes en los procesos electorales, y se traducen en una actuación positiva del Estado en este caso, pero que por otro lado, implica la abstención del mismo Estado de participar como actor político en la contienda electoral, así como la abstención de las autoridades o servidores públicos que actúan en ejercicio de una función pública de injerir en el desarrollo de dichos procesos. Una aproximación al concepto de equidad en materia electoral permitirá establecer la existencia de reglas de equidad para la contienda electoral en la legislación mexicana. En el presente ensayo se presenta un panorama no exhaustivo de estas reglas.

## **INTRODUCCIÓN**

El tema de la equidad en la contienda electoral, presenta dos vertientes que deben ser examinadas por separado; la primera vertiente se refiere a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relativas a los derechos y prerrogativas otorgados a los partidos políticos y sus candidatos y a los candidatos independientes, definidos y enunciados tanto en la Constitución como en la Ley; el estudio de ese conjunto de disposiciones conduce al análisis de los principios que sustentan cada uno de los derechos otorgados por la ley y la variabilidad en la calidad y la cantidad de las prerrogativas que se conceden a los partidos políticos, para una igual posibilidad de participación en la contienda electoral en condiciones de equidad.

La segunda vertiente, se refiere a las condiciones que debe garantizar el Estado para generar condiciones de igualdad de oportunidades y posibilidades para el desarrollo de las campañas políticas de cada uno de los partidos políticos y sus candidatos y para los candidatos independientes que contiendan en las elecciones, y se traducen en una actuación positiva del Estado en este caso, pero que por otro lado, implica la abstención del mismo Estado de participar como actor político en la contienda electoral, así como la abstención de las autoridades o servidores públicos de injerir en el desarrollo de los procesos electorales con el fin de inducir el voto en favor o en contra de un determinado candidato o partido político.

En relación con la primera vertiente, encontramos que la equidad en materia electoral tiene su fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como principio regulador de la función electoral y de los procesos electorales, se concretiza en el reconocimiento y otorgamiento de diversos derechos y prerrogativas a los partidos políticos y sus candidatos y a los candidatos independientes. La equidad, como principio que regula el ejercicio de la función electoral en general y la organización, preparación, vigilancia y desarrollo de los procesos electorales en particular, tiene su fundamento en el citado artículo 41 constitucional, como garantía para los partidos políticos y sus candidatos y para los candidatos independientes de que contarán con iguales posibilidades para la participación en la contienda electoral.

La norma constitucional que fundamenta la equidad como garantía para que los partidos políticos puedan contender en las elecciones en condiciones de

acercamiento posible a condiciones de igualdad, es la disposición general establecida en el primer párrafo de la fracción I del artículo 41 constitucional que dispone: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden”.

En cuanto a la segunda vertiente, en el mismo artículo 41 constitucional se prevé la obligación del Estado y sus órganos de abstenerse de realizar actos que puedan ser considerados de carácter político-electoral. El apartado C de la fracción III, segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, dispone:

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 134, párrafos séptimo al noveno de la misma Constitución, ordena:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

La democracia no es sólo el ejercicio de los procesos electorales ni se agota en ellos; la democracia de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es, además de un régimen político y jurídico, “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo”, y justamente por ser una forma de vida, es un ejercicio permanente y por lo mismo la función y el fin de los partidos políticos deben traducirse en una actividad permanente que logre vincular el poder público con la opinión ciudadana a fin de que sociedad y gobierno se conviertan en agentes de cambio y de progreso.

La regulación de la constitución, desempeño y fines de los partidos políticos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los define como entidades de interés público, les reconoce una naturaleza jurídica particular o propia, lo que es de suma importancia, pues lleva implícita la obligación del Estado de asegurarles las condiciones necesarias e indispensables para que se desarrollen, es decir, que el Estado tiene la obligación de propiciar su fortalecimiento e impulsar a tales organizaciones, a efecto de fortalecer asimismo el sistema abierto de partidos.

Sin perder de vista que los partidos políticos son entidades de interés público, y que por lo mismo el Estado tiene la obligación de garantizar su fortalecimiento y desarrollo, de igual modo debe tenerse presente que su misma calidad de entidades de interés público les obliga al cabal cumplimiento de los fines que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales les encomiendan, por lo que la interrogante acerca de que si las disposiciones que previenen diversas modalidades e hipótesis por cumplir para el otorgamiento de las garantías y prerrogativas, que como ya ha sido señalado tienen como efecto su otorgamiento en cantidad y calidad distintas --no como sanción cuando se otorguen en calidad y

cantidad menor, sino a consecuencia de la falta de acción de los partidos que se traduce en una menor obtención de votos en las elecciones— son justas o equitativas, deben ser analizadas también desde la óptica del debido cumplimiento de sus objeto y fines por parte de los partidos políticos, pues no debe perderse de vista igualmente que, según la expresión aristotélica, "lo justo en las distribuciones debe ser conforme a cierto mérito" (Aristóteles, 1973: 61) .

## **1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EQUIDAD<sup>1</sup>**

El examen de las normas constitucionales y legales que regulan la participación de los partidos políticos en la contienda electoral, debe llevarnos a la lectura de aquéllas que de manera precisa otorguen diversos derechos y prerrogativas a los partidos políticos y sus candidatos y a los candidatos independientes, y cuya finalidad es la de lograr un equilibrio durante el desarrollo de la contienda electoral pretendiendo crear condiciones de igualdad para los partidos políticos. Tales disposiciones, pueden ser consideradas reglas de equidad.

El concepto equidad está estrechamente vinculado al de justicia por lo que, es necesario aproximarse a las nociones *de justicia y de equidad*.

Para Francisco Larroyo, el valor ético-social por excelencia es la justicia, textualmente nos enseña que:

El valor ético-social por excelencia es la justicia, frente a él, falla todo intento de fundar una filosofía moral individualista. La justicia como virtud ética fundamental, es impensable, en rigor, sin la noción de una comunidad de hombres. Ya su sentido originario lo muestra a las claras. La justicia es la tendencia opuesta al brutal egoísmo del particular. El egoísta exige todo para él, poco le importan los demás; la justicia, al contrario, proclama: 'no todo para mí, sino lo mismo para mí y los otros'. Rasgo esencial en ella es, por lo tanto, la idea de

---

<sup>1</sup> Quiñones Tinoco, Carlos Sergio. *La equidad en la contienda electoral*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2002. Col. Doctrina Jurídica Estatal 2, pp. 15 – 38. Destaco los puntos principales de la propuesta conceptual expuesta en el ensayo de mi autoría *La equidad en la contienda electoral*.

igualdad: igual derecho e igual deber con los otros, tanto frente al particular, como frente a la comunidad (Larroyo, 1976: 233).

La palabra justicia deriva del vocablo latino "*justus*", que significa la conformidad al derecho, tal vocablo a su vez deriva del latín "*jus*" que significa derecho; raíces etimológicas de las que se infiere que la justicia es una calidad jurídica, aun cuando no se le estime como un elemento esencial de la definición del derecho.

Ángel Sánchez de la Torre, nos dice, citando a Luis Recaséns Siches, que "al parecer, pese a las distintas definiciones del término, 'la justicia es entendida casi siempre como una armonía, como una igualdad proporcional, como una medida armónica de cambio y de distribución'" (UNESCO, 1987: 1204).

Siguiendo esta línea conceptual, puede decirse que en el hombre existe una intuición de lo justo y de lo injusto; en la conciencia humana se da espontáneamente un sentimiento de justicia, hay un anhelo de alcanzar ese ideal. Pero para alcanzar ese ideal, es necesario objetivarlo, conocerlo en su esencia; sólo así podrá encaminar su conducta a ese ideal, y proponer los medios para alcanzarlo.

La objetivación del ideal de justicia parte del sentimiento o de la noción que se tiene de ella; este sentimiento o noción induce a considerar lo que es justo y lo que es injusto de acuerdo con el sistema de valores que aplica una sociedad determinada; un valor inseparable de la justicia es la igualdad, lo que significa que en cada acto de justicia está presente la conciencia de la dignidad del otro; el individuo que actúa pensando que su actitud es la merecida por el otro, actúa con justicia.

En la complejidad de las relaciones humanas, igualdad y justicia son condiciones para la existencia de la sociedad, y siendo todos sus miembros responsables de su destino, corresponde a cada uno la realización de la justicia, en la actividad diaria. Justicia es armonía, es la distribución de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad según su función. Por eso Fausto E. Vallado Berrón (1961: 214) señala que el ideal de justicia puede ser determinado

racionalmente por el conocimiento como un principio cuya función es regulativa, su concreción se da dentro de los diversos órdenes normativos.

Por otra parte, la equidad se ha caracterizado como una calidad jurídica que juega un papel de primera importancia en la aplicación del derecho. Se le concibe como uno de los principios generales del derecho y en nuestro sistema de derecho se le asigna un papel de integración del derecho para llenar las lagunas del mismo, es decir, es el principio corrector de insuficiencias, al tiempo que también se le tiene como principio de interpretación.

Tradicionalmente se concibe la equidad como el principio que flexibiliza la aplicación de la ley en la norma individualizada. Por eso desde Aristóteles, equidad es igual a justicia, pero concebida como el principio que permite obtener la aplicación de la justicia donde la ley no alcanza este propósito; de acuerdo con esta idea, lo justo y lo equitativo son lo mismo, pero aún es mejor lo equitativo que es un enderezamiento de lo justo legal, por eso lo equitativo es mejor que lo justo legal, pero no mejor que lo justo absoluto (Aristóteles, 1973: 71).

La palabra equidad deriva del latín "*aequitas*", éste a su vez deriva de "*aequus*" que significa "*igual*"; atendiendo a su raíz etimológica, la noción se vuelve incierta y equívoca, por lo que también se le concibe como justicia natural por oposición a la legal. De igual modo atendiendo a este criterio de igualdad, la equidad es sinónimo de determinada actitud a la hora de regir las relaciones entre las personas.

Según Friedmann (Azúa, 1986: 162) la equidad tiene dos funciones: 1. Corregir las insuficiencias y la rigidez del derecho civil o del derecho común y 2. Funciona como principio de interpretación. De acuerdo con la segunda función la equidad:

[. . .] es un principio de interpretación esencial y difundidísimo en las codificaciones contemporáneas y en los sistemas de derecho consuetudinario. La referencia a la equidad en los textos legales suele encontrarse en dos formas, la primera es una referencia expresa, la segunda es sobreentendida, tácita. La primera forma no requiere por supuesto de mayores análisis ni comentarios, en cuanto



a la segunda, con frecuencia se nos presenta en forma evidente y en muchos casos, sólo es posible ver su presencia mediante el análisis cuidadoso que hace el jurista de las múltiples relaciones que se presentan en un sistema jurídico dado, en estos casos, la equidad pasa desapercibida para el no versado en la materia (Azúa, 1986: 163).

Lo expuesto sobre el concepto de equidad resume la idea surgida en la antigüedad clásica y las distintas fórmulas que han sido aplicadas en las diversas épocas de la historia de la humanidad que permitieron dar a la equidad perfiles y aplicaciones diversas, que aún en nuestro tiempo tienen plena validez. Sin embargo, como bien señala el jurista mexicano Mario de la Cueva, "... el pensamiento del presente no puede estar limitado por fórmulas del pasado, porque la vida no es un simple perpetuarse, ni siquiera un transformarse, sino un hacerse y crearse constantemente" (Izquierdo, 1994: 608).

Con el surgimiento del derecho social, la equidad adquiere una significación particular. Mario de la Cueva explica con claridad esta nueva significación del concepto de equidad:

Al resumir el pensamiento aristotélico y aquinatense: la equidad es una fuente supletoria por cuanto es lo justo más allá de la ley escrita y su enderezamiento o rectificación y, un principio de interpretación que obliga al juez a mirar no a la ley sino al legislador, no a la letra ni al hecho, sino a la intención, no a la parte sino al todo, nos preguntamos si la idea de lo social no está de tal suerte impregnada por la equidad que de verdad no es sino la aplicación de su sentido humano (Izquierdo, 1994: 614).

Y más adelante explica: "Creemos que estamos en presencia de una nueva misión de la equidad, que ya no es la búsqueda de la justicia para cada persona individual, sino la justicia para los hombres que por las peculiaridades de su

trabajo constituyen una especie de individualidad social, para decirlo así, frente a otras individualidades sociales".

Y concluye: "Si se acepta esta ampliación, la idea de equidad deberá ser considerada como una noción doble, o como poseedora de una doble misión: la justicia del caso personal y la justicia del caso colectivo individualizado" (Izquierdo, 1994: 615).

Con el surgimiento del reclamo por la equidad, por parte de los partidos políticos, para lograr un tratamiento igual en la ley y condiciones de igualdad en las contiendas electorales, podría pensarse que estamos frente a una nueva misión de la equidad, cuya encomienda podría ser la de compensar las desventajas contingentes en que se encuentran algunos partidos políticos en dirección a la igualdad con aquéllos que han logrado acceder en diferentes formas y estadios a la integración de la representación estatal.

Esta concepción, de cualquier forma, tiene su fundamento en la idea que Aristóteles tenía de la justicia distributiva, la que hacía descansar en el principio de que los iguales deben recibir cosas iguales y los desiguales cosas desiguales de manera proporcional a su desigualdad. A partir de este principio, se establece la relación entre justicia y equidad, para definir a la equidad como una cierta especie de justicia. Apoyada en el principio señalado, la equidad en materia electoral adquiere un sentido de beneficio a favor de los partidos políticos que se encuentran en desventaja contingente (contingente porque esta desventaja puede ser superada en la medida en que su acción y oferta políticas impacten en el cuerpo electoral y obtengan de éste la confianza para contribuir a la integración de la representación popular y acceder al ejercicio del poder público), pues con este propósito, la ley electoral concede a los partidos políticos una serie de prerrogativas que les otorga formalmente un status de igualdad con sus contrincantes y que les permite actuar en los procesos electorales en igualdad de condiciones en la integración de los órganos electorales y con las mismas facultades de acción política.

## **2. LA EQUIDAD ELECTORAL EN SU VERTIENTE DE REGULACIÓN DE DERECHOS Y PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES**

Es inconcuso que el derecho, en tanto que producto de las relaciones entre los hombres, busca resolver problemas humanos y por eso establece finalidades o propósitos, por lo que es menester encontrar en sus diversas disposiciones, nexos y significaciones que encaminen a la realización de tales finalidades o propósitos (Quiñones, 2002: 57).

Por eso es preciso definir los principios contenidos en las normas que regulan la actuación de los contendientes en los procesos electorales a fin de poner al descubierto las finalidades o propósitos contenidos en ellas.

Los principios que considero que regulan la actuación de los partidos políticos en los procesos electorales son los de igualdad, diferencia, proporcionalidad y conciliación, cuya realización en el desarrollo del proceso electoral propician un equilibrio entre los diversos contendientes. El examen de su realización en los casos concretos que previene la ley, parece ser el camino para determinar si existe equidad en las normas que regulan la contienda electoral.

Para definir el principio de igualdad, considero necesario examinarlo conjuntamente con su opuesto, que sería el principio de diferencia, que afirma que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación; esta concepción nos enseña que en la sociedad organizada existe una inclinación natural a la igualdad, se busca compensar las desventajas contingentes en dirección a la igualdad. El principio de igualdad por el contrario supone una misma clase o condición en personas o entidades diversas. La igualdad existe cuando no existen desventajas naturales o contingentes. Como principio establecido en la ley, atiende a la calidad jurídica de las personas o entidades.

El principio de proporcionalidad tiene en la ley su original sentido matemático, que se refiere a cantidades que están en proporción o en igualdad de razones, con otras cantidades del mismo género. Tiene su aplicación estimando que la distribución de los beneficios que otorga la ley se da en atención a una

dependencia funcional; se trata de un caso de justicia distributiva que atiende al mérito.

El principio de conciliación brinda la posibilidad a diversos actores de armonizar intereses. Conciliar es hacer compatibles dos o más proposiciones; como principio establecido en la ley tiene como presupuesto la igualdad de los actores y atiende a su calidad jurídica, pues en este proceso (para su aplicación) intervienen los partidos políticos y los candidatos independientes.

El primer párrafo de la fracción II del artículo 41 constitucional dispone que: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

En el siguiente párrafo y en los incisos a) al e) prescribe las bases para el otorgamiento del financiamiento público, conforme al principio de equidad previsto en el primer párrafo de la fracción II, estableciendo que el fondo que se destine para ello se repartirá conforme a la siguiente regla: 30% de dicho fondo igualitariamente para todos los partidos políticos y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. El financiamiento para las actividades tendientes a la obtención del voto será igual al 50% que le corresponde a cada partido político en el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados, y será equivalente al 30% cuando sólo se elijan diputados. También existirá un fondo para financiar actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales equivalente al 3% del monto para financiamiento para actividades ordinarias, que se repartirá a los partidos políticos bajo la misma regla de 30% y 70%.

Las bases del régimen de financiamiento público para actividades tendientes a obtener el voto de los candidatos independientes se encuentran en la ley de la materia.

La fracción III del mismo artículo 41 constitucional, establece que “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley”.

En los subsiguientes apartados de esta fracción, se establecen las reglas para la distribución del tiempo en radio y televisión entre los partidos políticos bajo el mismo principio de 30% en forma igualitaria y 70% atendiendo a la fuerza electoral de cada partido. Del 30% que se asigna en forma igualitaria a los partidos, se reserva el tiempo que correspondería a un partido para repartirse entre el número de candidatos independientes en forma igualitaria.

Otros principios de equidad en esta primera vertiente se actualizan en la aplicación de las normas que otorgan a los partidos políticos una serie de derechos y prerrogativas otorgadas en consideración a su naturaleza jurídica de entidades de interés público por lo que se surten bajo el principio de igualdad; estas derivan de las normas legales relativas a: la participación de los partidos políticos en los órganos electorales; la integración de coaliciones; el financiamiento público-directo e indirecto- y privado de los partidos políticos, tanto para sus actividades ordinarias como para actividades tendientes a obtener el voto; prerrogativas para el uso de radio y televisión; fijación de topes de gastos de campaña, y el desarrollo de las campañas electorales.

Las anteriores prerrogativas deben ser otorgadas, en lo que corresponda a los candidatos independientes, toda vez que en el caso de ellos lo anterior se encuentra sujeto a un régimen especial, que deriva de su condición de ciudadanos que se postulan como candidatos independientes de los partidos políticos, por lo que su estatus es diferente al de los partidos políticos, que son entes colectivos de interés público con existencia más o menos permanente; así, es comprensible que los candidatos independientes no sólo reciban financiamiento para actividades encaminadas a la obtención del voto y les esté vedado el derecho de formar coaliciones.

### **3. LA EQUIDAD EN SU VERTIENTE COMO CONDICIONES DE IGUALDAD DE POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS GARANTIZADA POR EL ESTADO**

En esta segunda vertiente de la equidad en materia electoral, problema que se plantea se refiere a la actuación de los titulares de los órganos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y a los controles jurídicos para evitar y sancionar los actos que redunden en iniquidad en perjuicio de partidos políticos y candidatos independientes.

El fundamento de esta vertiente se encuentra en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya han sido referidos en la primera parte de este trabajo y que se refieren fundamentalmente a la suspensión empleo de propaganda gubernamental durante los procesos electorales y a la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad en la competencia entre partidos.

A lo anterior hay que agregar que el Apartado D de la fracción III del propio artículo 41 constitucional ordena:

El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

En relación con estas disposiciones constitucionales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, previene en el Libro Octavo, titulado “De los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno”, señala como sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, entre otros, a *“Las autoridades o los servidores públicos de cualquier de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno*

*municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público”* (artículo 442, apartado 1, inciso f), y las infracciones que les pueden ser imputadas, se encuentran especificadas en el artículo 449, y son las siguientes:

**1.** Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

**a)** La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales;

**b)** La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

**c)** El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;

**d)** Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;

**e)** La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y

**f)** El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Sin embargo, en relación con la comisión de las infracciones previstas en el señalado artículo 449, no se establece en la Ley la sanción que deba corresponderle a cada conducta infractora, sino que de acuerdo con el artículo 457, el expediente que se integre deberá ser remitido al superior jerárquico de la autoridad o servidor público infractores, para que aquél proceda en los términos de la ley que resulte aplicable, debiendo comunicar al Instituto las medidas adoptadas, y si la autoridad o servidor público no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en la entidad federativa que corresponda, para los efectos señalados.

Filiberto Otero Salas (2008) destaca la conveniencia de diferenciar la actividad del Estado y la participación de la persona que se desempeña como titular de alguno de sus órganos; en relación con esto, dice:

El Estado al desplegar su actividad por conducto de actos de poder lo hace a través de personas físicas, ante tal situación operan la objetividad y subjetividad, si se incurre en exceso de poder, es conveniente que los órganos de control se diseñen para operar con una doble sanción, la objetiva anulando el acto o norma y una subjetiva sancionando al sujeto, porque si el Estado tiene determinadas facultades y el titular del órgano está impedido para hacer mal uso, si lo hace, quien se excede aparentemente es el Estado, pero en sí, quien se extralimita es el sujeto mismo, por tal motivo, resulta evidente anular el acto y sancionar al sujeto, imputándosele el exceso al sujeto (Otero, 2008: 292).

Y más adelante explica que: “La vinculación entre subjetividad y objetividad operativa en un instrumento de control, lo hacen eficaz y por ende el sujeto no queda al margen del control tratándose de controles jurídicos” (Otero, 2008: 297).

Cabe precisar que de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas, el criterio seguido privilegia la subjetividad y se busca sancionar a los sujetos que actúan con la representación estatal, existiendo



vinculación con el aspecto objetivo, lo que es resuelto fundamentalmente por la instancia jurisdiccional.

Por otra parte, para garantizar equidad en las condiciones de la competencia electoral, en la Ley General de Partidos Políticos, se establece las siguientes prohibiciones en el artículo 54, para entidades públicas:

**1.** No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

**a)** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

**b)** Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

**c)** Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. . .

Igual prohibición se encuentra establecida en el artículo 401 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los candidatos independientes.

## **CONCLUSIONES**

De lo expuesto en el cuerpo de estos apuntes, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

1. El problema de la equidad en la contienda electoral en su vertiente relativa a la compensación de las desventajas contingentes en que se encuentran algunos partidos políticos, cuyo fin es el de encaminar a la igualdad con aquéllos que poseen un mayor capital político y representativo sustentada en los principios referidos de igualdad, diferencia, proporcionalidad y conciliación, se cumple de manera más o menos satisfactoria en el desarrollo de los procesos electorales.

2. Las acciones propagandísticas de la obra pública y el aprovechamiento de los recursos provenientes de los fondos públicos en la aplicación de programas sociales en el tiempo de desarrollo del proceso electoral hasta el día de la jornada electoral con el fin de inducir el voto a favor o en contra de algún candidato o partido político, en franca contravención a las prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley, rompen con la equidad en la contienda electoral al introducir elementos provenientes de las instancias de gobierno que darían ventaja a alguno de los contendientes, ante lo cual tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos se han establecido normas con el fin de que los contendientes en las elecciones tengan iguales oportunidades para sus actividades de promoción del voto.

3. En el próximo proceso electoral contendrán por primera vez candidatos independientes; el resultado de este nuevo ejercicio democrático indicará si las reglas de equidad para la contienda electoral establecidas en la ley y particularmente su aplicación en el caso de estos candidatos son suficientes para una que la contienda electoral sea realmente equitativa también para los candidatos independientes dada la desventaja natural en que se encuentran en relación con los partidos políticos y sus candidatos.

Es importante continuar por caminos de perfeccionamiento de nuestra democracia; el respeto al principio equidad en la contienda electoral y la definición de controles jurídicos para evitar los excesos de poder y la injerencia de los gobernantes en los procesos electorales es uno de tales caminos.

## **Bibliografía**

Aristóteles. 1973. *Ética nicomaquea*. México: Porrúa,

Azúa Reyes, Sergio T. 1986. *Los principios generales del derecho*, México: Porrúa.

*Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales*. 1987. Barcelona: Planeta-Agostini.

- Izquierdo y de la Cueva, Ana Luisa (comp.). 1994. *El humanismo jurídico de Mario de la Cueva*, México: Fondo de Cultura Económica – Universidad Nacional Autónoma de México.
- Larroyo, Francisco. 1976. *Los principios de la ética social*. México: Porrúa.
- Otero Salas, Filiberto. 2008. *Los instrumentos de control político y jurisdiccional en el Estado constitucional. Antecedentes, actualidad y perspectivas*. México: Porrúa.
- Quiñones Tinoco, Carlos Sergio. 2002. *La equidad en la contienda electoral*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Vallado Berrón, Fausto E. 1961. *introducción al estudio del derecho*. México: Herrero.